///la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi, y Carlos A. Mahiques bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Prosecretaria de Cámara, doctora Daniela Dora Rocha, para dictar sentencia en la causa n° FSM [redacted]/2016/TO1/CFC1, caratulada: "F[redacted] C[redacted], G[redacted] y C[redacted] D[redacted], G[redacted] A[redacted] s/recurso de casación". Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Javier Augusto De Luca y la defensa particular de G[redacted] C[redacted] D[redacted] fue asumida en la instancia por el Dr. Luis Eduardo Montané López y la de G[redacted] F[redacted] C[redacted] por las Defensoras Públicas Oficiales Brenda Palmucci y Gabriela M. Jugo.

Efectuado el sorteo para que los señores Jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Catucci, Mahiques y Riggi.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La señora Juez doctora **Liliana Elena Catucci** dijo:

PRIMERO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal a raíz de los recursos de casación interpuestos por la defensa particular de G[redacted] C[redacted] D[redacted] y por la Defensa Pública Oficial de G[redacted] F[redacted] C[redacted] (fs. 512/550 y 551/561 vta. respectivamente), contra la sentencia dictada por el Dr.

Daniel A. Petrone, en su calidad de juez unipersonal, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín, (fs. 475/6 y 480/509), que **condenó, a G[redacted] A[redacted] C[redacted] D[redacted]** y a **G[redacted] F[redacted] C[redacted]** a las penas de **DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas**, como **coautores** penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por mediar engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad y porque la víctima era menor de edad (arts. 45, 145 bis, 145 ter, inciso 1° y último párrafo –según ley 26.842-, del Código Penal).

Concedidos por el a quo los remedios intentados (fs. 562/563 vta.), fueron mantenidos a fs. 570 y 571.

Durante el término de oficina (art. 466 del C.P.P.N.), el Fiscal General, Dr. Javier Augusto De Luca en su escrito de fs. 573/579, solicitó el rechazo de los recursos de casación interpuesto por las defensas.

Por su parte la Defensora Pública Oficial, Dra. Gabriela N. Jugo, por la asistencia de G[redacted] F[redacted] C[redacted], pidió que se haga lugar al recurso de casación interpuesto por su colega de la anterior instancia y a los agravios nuevos que introdujo en esta presentación, que se describirán más adelante (fs. 581/587).

Celebrada la audiencia prevista por el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación (fs. 595), el defensor particular de G[redacted] C[redacted] D[redacted], Dr. Luis E. Montané López, reiteró los planteos de nulidad de la declaración prestada por la menor en Cámara Gesell y de la declaración indagatoria de su defendido y se remitió al

resto de los agravios expuestos en su recurso de casación, y el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

SEGUNDO:

1. El defensor particular de G[redacted] C[redacted] D[redacted], encauzó el recurso de casación en los dos motivos previstos en el art. 456 del C.P.P.N. con los siguientes agravios:

a. Nulidad de la declaración de la menor en Cámara Gesell, por haber afectado el derecho de defensa en juicio amparado en la Constitución Nacional (arts. 167, inc. 3° y 172 del C.P.P.N.).

Se quejó porque en lugar de notificar por cédula a la Defensa Oficial de esa medida, se lo hizo por vía telefónica y se cumplió antes de las 24 horas, sin que conste la hora ni el nombre del funcionario de la defensoría con el que se comunicó el secretario.

Dijo que ese defecto se agrava por cuanto al no haberse presentado la menor C.N.F. al debate oral y público, porque no se libró exhorto diplomático, se vio impedida de ejercer el adecuado control de esa prueba.

b. Nulidad de la declaración indagatoria de su defendido por haberse inobservado el art. 36, ap. 1°, inc. B) de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, 18 de la C.N., 167, inc. 3° y 168, inc. 2° del C.P.P.N.).

Señaló que no se notificó a C[redacted] D[redacted], de nacionalidad peruana el derecho de ser asistido por el consulado correspondiente, quien le hubiera podido aconsejar que no declarara, omisión por la cual consideró afectado el derecho de defensa en juicio y el debido

proceso legal (art. 18 de la C.N. y las normas y Tratados Internacionales de igual rango), por lo que solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de esa indagatoria.

c. Falta de fundamentos de la sentencia por arbitraria valoración de la prueba (arts. 404, inc. 2° y 123 del C.P.P.N.).

La defensa tildó de arbitraria la sentencia, por su falta de fundamentos, por sus contradicciones y afirmaciones dogmáticas, por la omisión de valorar prueba dirimente para la correcta solución del caso, todo ello en contra de las reglas de la sana crítica racional que afectaron las garantías de *in dubio pro reo* y presunción de inocencia (art. 18 de la C.N.).

Destacó las contradicciones en que incurriera la menor denunciante, y reiteró que la incorporación por lectura de su denuncia, y de lo que dijo en la Cámara Gesell, sin haber podido contar con la presencia de la menor en el debate le impidió ejercer su control, afectando el derecho de defensa en juicio (arts. 18 de la C.N., los concordantes establecidos en la CADH y el PIDCyP y 3° del C.P.P.N.).

Dijo que no se tuvo en cuenta que la indagatoria de su defendido coincidía con el resto de las pruebas, habiéndose llegado a un juicio de condena sobre la base de una presunción de culpabilidad, violando la prohibición de autoincriminación, el principio de imparcialidad, el derecho de defensa y el de *in dubio pro reo* (cfr. en razón de brevedad, declaraciones de los padres de la menor –fs.

226/227 y 297/301-, fotografías de fs. 221/225 incorporadas por lectura y la declaración del padre de la menor, R[redacted] N[redacted] C[redacted] mediante el sistema Skype).

Señaló también la falta de valoración del minucioso relato de los progenitores de la menor, que generan una duda razonable sobre las graves imputaciones que pesan sobre su asistido.

Agregó que desde un principio la relación con la menor fue la pactada voluntariamente con sus padres, sin engaño ni captación, que fue a trabajar en la casa de sus defendido a realizar tareas domésticas.

Manifestó que los testimonios de P[redacted] F[redacted] F[redacted] P[redacted] y E[redacted] C[redacted] A[redacted] S[redacted], coincidieron en la falta de apego de la realidad en el relato de la menor, diciendo que ésta era comunicativa, que la trataban bien y que tenía plena libertad para salir del domicilio, para concurrir al puesto de venta de celulares y para usar el celular que tenía hasta que se lo robaron y que nunca vieron nada extraño. Trato confirmado con las fotos que acompañó a fs. 222/225.

Criticó el informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata, elaborado por la Licenciada Griselda Hoffman, pues carece de fundamentos, ya que la investigación fue deficiente y sólo se sustentó en la declaración de la víctima.

Señaló que la investigación está plagada de irregularidades pues, pese a que su defendido estaba identificado, no se allanó su domicilio para intentar

establecer las condiciones en las que vivían, o secuestrar las armas con las que supuestamente amenazaba y ejercía violencia hacia la menor.

Se quejó de la falta del testimonio de la persona que acompañó a la menor al consulado, pieza que estimó de valor pues hubiera podido ratificar o no la versión de la menor.

Concluyó que la arbitraria valoración de la prueba derivó en la errónea calificación legal, pues no se probó la existencia de captación, reclutamiento, transporte, acogimiento o recepción de una persona con el fin de explotarla, mediante engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios (fs. 543/44).

En definitiva concluyó en que el delito atribuido a su asistido no está probado, por lo que solicitó que se haga lugar al recurso de casación, y que se anule el fallo recurrido por estricta aplicación del *in dubio pro reo* (art. 3° del C.P.P.N.). Hizo reserva del caso federal.

2. La Defensora Pública Oficial de G[redacted] F[redacted] C[redacted] también invocó los dos motivos en el recurso de casación presentado (art. 456 del código de rito), y expuso los siguientes agravios:

a. Nulidad de la entrevista realizada el 5 de julio de 2016 a la menor C.N.F. mediante Cámara Gesell (art. 250 bis y quáter del C.P.P.N.).

Indicó que a raíz de la forma en que se la notificó, según constan en el informe actuarial de fs. 49,

se la privó de controlar el único testimonio de cargo que diera origen a los actuados, lo que no pudo remediar en el juicio, dado que la menor abandonó el país y no retornó ni siquiera a ratificar la denuncia.

Dijo que tuvo menos de 24 horas para interiorizarse de la causa, previas a dicha prueba lo que la privó de la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos (arts. 18 de la C.N., 8.2f. de la CADH y 14.3e. del PIDCyP) y lesionó el derecho de defensa, más aún cuando la menor nunca volvió a declarar.

Solicitó que se declare la nulidad de la sentencia (art. 456, inc. 2° y 167, inc. 3° y 172 del C.P.P.N.).

b. Arbitraria valoración de la prueba reflejada en la errada calificación legal seleccionada por el magistrado del tribunal oral.

Dijo que la sentencia carece de la debida fundamentación, con afectación al principio de *in dubio pro reo* (arts. 123 y 404, inc. 2° del C.P.P.N.).

En términos generales la asistencia legal de la nombrada [redacted] reiteró los fundamentos del defensor de su pareja, [redacted], tendientes a la atipicidad del hecho, insistiendo en que su defendida no participó en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado que se le atribuyó. Reclamó la aplicación del art. 3° del C.P.P.N..

Acotó que según el relato el padre de la menor [redacted], mediante el sistema Skype, el hecho no

le habría dejado secuelas físicas o psíquicas a la menor C.N.F., quien estaría realizando una vida normal.

Aclaró que no se comprobó que la menor hubiera efectuado tareas excesivas de explotación laboral, como hubieran sido jornadas prolongadas, o maltrato o que hubiera sido castigada por F[redacted] C[redacted], que no se impidió su contacto con sus familiares ya que la menor contó que mantenía contacto y que tenía una amiga.

El juez forzó las pruebas para tratar de acreditar la crueldad, pero que no alcanza para demostrar que hubo un sometimiento sistemático de la menor vinculado a hechos de violencia como son los sufridos por quienes son víctimas de trata.

Agregó que incurrió en una serie de contradicciones sobre las condiciones en las que vivía en la casa vinculadas con lo que viene exponiendo, a las que cabe remitir en razón de brevedad (fs. 580).

Sostuvo que todo ello se contrapone con la libertad ambulatoria que dijo su defendida durante su indagatoria, agregando que se podía comunicar con su padre todas las noches, a punto que en las fotografías que aportó (fs. 223/25) se la ve sonriendo, sin preocupaciones.

Expresó que junto con su esposo trajeron a la niña de buena voluntad, con autorización de sus padres ante notario, y que lo hicieron para que tenga un futuro mejor.

En apoyo de su postura, la impugnante, citó las declaraciones de la testigo F[redacted] P[redacted], que trabajaba en la feria de Villa Celina, del remisero A[redacted] S[redacted] y la dada en la sede de la policía de Bolivia por R[redacted] N[redacted]

C[redacted] y M[redacted] F[redacted] A[redacted], (testimonios certificados por la notaria Miriam Prada), para demostrar que la menor se movía sin restricciones y que se podía comunicar con sus familiares y que la trataban bien (fs. 580 vta.).

Refirió que C.N.F. denunció a su defendida porque no la dejaba salir a bailar y que ahora la menor estaba arrepentida. Y que la familia compartía todo con la menor, que la querían ayudar.

Sostuvo que la condena se fundó en los dichos de la menor, habiéndole resultado imposible a su defendida discutirlos por la ausencia durante el debate de la supuesta damnificada, vulnerándose el derecho de defensa en juicio.

Pidió la nulidad del fallo y la absolución de su defendida G[redacted] F[redacted] C[redacted], por estricta aplicación del art. 3° del C.P.P.N.. Hizo reserva del caso federal.

Durante el término de oficina la Defensora Pública Oficial, Dra. Gabriela N. Jugo, (fs. 581/587) reiteró los agravios expuestos en el recurso de casación de su colega de la anterior instancia en el sentido de que la conducta que se le atribuyó a su defendida es atípica y agregó los nuevos que se describen a continuación:

1. Arbitrariedad en el monto de la pena, pues la de diez años que se le impuso a su defendida carece de fundamentación suficiente, porque no se tuvo en cuenta que se trataba de una mujer extranjera, vulnerable sociológica y culturalmente, madre de dos niños menores de cinco años y sin antecedentes penales. Dijo que no justificó la

imposición de una pena de efectivo cumplimiento (art. 5.6 CADH y 10.3 del PIDCP).

Finalizó señalando que la falta de valoración de las pautas contenidas en los arts. 40 y 41 del C.P. revela la invalidez de la sentencia como acto jurisdiccional válido y reclamó su nulidad.

2. Pidió la eximición del pago de las costas procesales, alegando que hubo razón plausible para litigar.

Hizo reserva del caso federal (fs. 581/587).

TERCERO:

A. Nulidades:

1. Previo a ingresar en su tratamiento corresponde destacar que en la sentencia, como cuestión preliminar, se partió por recordar que el principio general que rige en materia de nulidades es el de legalidad o taxatividad, el cual impone que los actos procesales serán nulos únicamente cuando no se hubieren observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad. En tal sentido, el artículo 166 del Código Procesal Penal de la Nación "(…)impide declarar inválidos los actos procesales que exhiben defectos formales –excepción hecha de violaciones a garantías constitucionales-, si su descalificación no ha sido expresamente prevista (…)" (CNCP, Sala I, Causa N° 186, "Terramagra, Juan s/recurso de casación", Reg. N° 274, 25/08/94).

Pues tal como ha sido tradicionalmente sostenido, existen dos categorías fundamentales: "(…) la primera, dependiente de la forma de determinación legal de los

supuestos de nulidad, de su específica tipificación en hipótesis circunscriptas a concretos actos o de una tipificación genérica abarcativa de una pluralidad de ellos; la segunda, subordinada al distinto régimen de oposición y declaración o, en otras palabras, a los límites de la posibilidad de manifestar la nulidad para que ella produzca sus efectos típicos (…) (Creus, Carlos "Invalidez de los actos procesales penales", Editorial Astrea, 2da. edición, 1995, pág. 26/27).

Conforme este criterio, la legislación procesal nacional diferencia las nulidades expresas de las genéricas; las primeras se encuentran específicamente enunciadas en una serie de normas, en las que al regularse un acto en particular se imponen las condiciones de forma, cuyo incumplimiento se sanciona con el remedio procesal bajo análisis, mientras que las segundas se suscitan cuando se advierte una falencia que afecta la regularidad de un acto, pese a no hallarse expresamente contemplada.

Asimismo, el ordenamiento procesal distingue las nulidades absolutas de las relativas; mientras que las primeras importan la violación de una norma constitucional o se hallan expresamente establecidas (art. 168 CPPN) y no son subsanables dentro del proceso, las segundas operan en función del interés de alguna de las partes y son pasibles de saneamiento. En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que "el conjunto de nulidades genéricas, sistematizadas, son absolutas o relativas, según violen o no normas constitucionales" (CNCP, Sala II, Causa N° 40,

"Guillen Varela, J. s/ recurso de casación"; Reg. N° 58, 18/11/93).

Por otra parte, se recordó que el postulado rector en lo que atañe al sistema de nulidades es el de la conservación de los actos, razón por la cual la interpretación de la existencia de aquellas debe ser restrictiva. Dicha exégesis ha sido impuesta por el art. 2 del código de rito, el cual prescribe que "Toda disposición legal que (…) establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente".

En tales condiciones, sólo procede su declaración cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que las invoca, más no en los casos en que éstas se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (cfr. CSJN, in re: "Bianchi, Guillermo Oscar s/defraudación", B. 66 XXXIV, del 27/6/02; y "Acosta, Leonardo y otros s/robo calificado en grado de tentativa", 63 CCCIV, 4/5/2000).

Se concluyó con cita de jurisprudencia de esta Cámara en que esa declaración exige como condición indispensable, la demostración de un agravio concreto y la específica indicación de las defensas que ella ha impedido.

Por lo demás, si bien es cierto que la normativa procesal establece que las nulidades producidas en la instrucción sólo podrán ser opuestas, bajo pena de caducidad, durante ésta o en el término de citación a juicio (art. 170, inc. 1° del C.P.P.N.), toda vez que de las argumentaciones de las defensas se infiere que las

hipotéticas nulidades resultarían de carácter absoluto, corresponde su tratamiento.

2. Nulidad de la declaración de la menor C.N.F. en Cámara Gesell (art. 250 bis del C.P.P.N.), por afectar garantías constitucionales (art. 18 de la C.N.), esgrimido por las respectivas defensas de G[redacted] A. C[redacted] D[redacted] y G[redacted] F[redacted] C[redacted].

El presente agravio es una reiteración del interpuesto en el juicio por las defensas de los procesados cuya respuesta por parte del juez del tribunal oral no fue asumida por la parte en esta instancia.

En efecto, se resaltó que la nulidad pretendida no se encuentra prevista dentro de los supuestos que expresamente prevé el art. 152 del C.P.P.N… Además en el mismo sentido que el fiscal se destacó que de la lectura de los autos principales se desprende que el 14 de julio de 2016 y en virtud de lo solicitado por el Fiscal de instrucción, al expedirse en los términos del art. 188 del C.P.P.N., el magistrado instructor encomendó al Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional entrevistar, el 5 de julio de ese año, a la menor C.N.F. por vía de la Cámara Gesell (art. 250 bis del C.P.P.N. –fs. 43/47 y 48/53-).

Seguidamente, el entonces secretario del juzgado, Dr. Ignacio Calvi, informó al magistrado que el 4 de julio de 2016 se había comunicado vía telefónica con la Fiscalía Federal n° 2 y con la Defensoría Oficial n° 1 de Morón a efectos de hacerles saber de la entrevista que se le realizaría a la menor mediante Cámara Gesell al día siguiente en la sede del Cuerpo Médico Forense, a las 12.30

horas (cfr. el informe elaborado por personal del Cuerpo Médico Forense 84/87 y la transcripción de ese entrevista fs. 117/125).

Sin admitir cuestionamiento alguno sobre la veracidad de esas notificaciones, dado que no fueron atacadas oportunamente por vía alguna, el pretendido agravio sobre el cual las defensas intentar sustentar una afectación a la defensa en juicio deja de ser tal.

En efecto, fue el magistrado quien puso de manifiesto que el corto lapso transcurrido entre la notificación realizada por el actuario y la producción de la medida probatoria mencionada, fue en procura de su celeridad economía procesal.

Además, se recalcó que la entrevista realizada a la víctima fue videograbada y posteriormente transcripta, lo que les permitió efectuar las observaciones que consideraran pertinentes o pedir su reproducción, lo que no hicieron.

Observaciones puntuales que dejan sin sustancia al supuesto agravio.

3. Nulidad de la declaración indagatoria de C[redacted] D[redacted], por no haberse notificado a la sede Consular de la República del Perú, conforme lo establece el art. 36, ap 1°, inc. B de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Se trata de la repetición de un agravio que el defensor de C[redacted] D[redacted] presentara en el debate y cuya debida respuesta no se ocupó de refutar, lo que ya anuncia su inadmisibilidad.

El juez del tribunal oral, en el mismo sentido que expuso el fiscal, y en base a los principios que rigen las nulidades *supra* enunciados, sostuvo que la omisión de notificación al consulado no está sancionada expresamente en nuestro ordenamiento legal con nulidad.

Se hizo notar que desde el comienzo de las actuaciones el encausado había sido asistido por un letrado defensor, garantizando la posibilidad de defenderse a punto que se había ofrecido la prueba estimada pertinente y había estado notificado de los distintos actos procesales, contado con la posibilidad de recurrirlos y finalmente se había celebrado un juicio oral y público, por lo que no se había podido concretar el perjuicio de la inasistencia consular, cuya presencia no se había pedido en momento alguno, lo que deja sin sustento el planteo defensista.

Tras ese razonamiento se rechazó la nulidad articulada que en esta sede pretendió renovar, sin refutar los argumentos expuestos, por lo que ha de darse la misma respuesta en sentido negativo.

Circunstancia que hace eco de la tratada en esta Sala in re: "Colque Huallpa, Ernesto s/recurso de casación", causa n° 11.059, Reg. n° 1698/2009, rta. el 23 de noviembre de 2009.

B. Fundamentación de la sentencia.

1. A fin de analizar si el grave hecho que se ha imputado a los nombrados fue debidamente probado ha de hacerse referencia a los fundamentos pertinentes de la sentencia.

En la sentencia dictada por uno de los jueces del tribunal oral se dio por probado el hecho -traído a juicio por el representante del Ministerio Público Fiscal- consistente en "…haber captado, trasladado, recibido y acogido en la localidad de Villa Celina, días antes del día 14 de noviembre de 2015 hasta el día 23 de junio de 2016, a C.N.F. –menor de edad y oriunda del Estado Plurinacional de Bolivia-, ……(con) una oferta laboral engañosa y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima para someterla a explotación laboral. Que la captación de C.N.F. tuvo lugar días antes de la primera de las fechas señaladas, en la ciudad capital boliviana, Sucre, donde la víctima residía junto a su madre, M[redacted] A[redacted], y su padre, R[redacted] N[redacted] C[redacted] y sus siete hermanos".

El episodio se originó cuando el 13 de septiembre de 2015 a la mañana mientras paseaba por la ciudad un hombre adulto, de la misma nacionalidad, a quien no conocía se le acercó y le ofreció trabajar como niñera en Argentina, al cuidado de una sola criatura sin realizar tareas de limpieza o lavado, de 7:00 a 20:00 hs., con un sueldo de Bs 5.000 (aproximadamente $ARS 12.000, a esa fecha), y que residiría en la vivienda de su empleadora donde dispondría de una habitación para su uso y descanso, con un ropero y un televisor, propuesta que le pareció interesante. Posteriormente recibió un llamado de G[redacted] F[redacted] C[redacted], quien le manifestó que quería conocer a su familia con el propósito de contarles sobre la propuesta de trabajo aludida y la convenció para que la

aceptara. Con posterioridad, la nombrada, su esposo G[redacted] C[redacted] D[redacted] y el hombre que la había interceptado en la calle, que podría tratarse del hermano de F[redacted] C[redacted], y C.N.F. (la menor) concurrieron a la casa de ésta, donde la mujer convenció a los padres de aceptar la proposición, diciéndoles que todos los meses le enviarían dinero con el que podrían comprar un lote y un automóvil. Como sus padres se negaron, G[redacted] F[redacted] C[redacted] se apersonó nuevamente en la casa de la víctima, junto a su esposo y el citado hombre y su pareja, y sus padres terminaron aceptando la propuesta con la promesa de que si luego de dos meses de permanencia en la Argentina, C.N.F. no lograba adaptarse, podría regresar al país quedando los costos de los pasajes a cargo de F[redacted] C[redacted] y C[redacted] D[redacted]. Seguidamente, se dirigieron todos a una oficina para la realización de la autorización legal, cuya tramitación fue rápida y costó 200 bolivianos, suma que fue abonada por F[redacted], quien retuvo la autorización, su cédula de identidad y su partida de nacimiento original sin devolvérselas. Que inmediatamente la menor con C[redacted] D[redacted] y F[redacted] C[redacted] fueron a la terminal de ómnibus donde compraron los pasajes de traslado desde Sucre hasta Villazón. Una vez llegados a dicha ciudad fronteriza, F[redacted] compró los pasajes para trasladarse a la ciudad de Liniers, Provincia de Buenos Aires, donde arribaron el 16 de noviembre de 2015. Ya durante ese viaje, la actitud de F[redacted] C[redacted] y C[redacted] D[redacted] comenzó a cambiar, volviéndose más hostil hacia ella y manteniendo violentas discusiones entre ellos. Que al llegar a Liniers,

fueron en un auto de alquiler hasta el domicilio de F[redacted] C[redacted] y C[redacted] D[redacted], ubicado en el último piso de la vivienda sita en la calle [redacted] del barrio de Villa Celina. Le proporcionaron un cuarto para descansar, el que era utilizado como depósito, estaba repleto de objetos y sólo contaba con un colchón muy fino. La casa tenía un olor hediondo, había bichos, ropa sucia tirada y platos usados. De inmediato, C.N.F. (la menor) tuvo que limpiar el lugar y comenzar a cuidar a… (el hijo menor) de F[redacted] C[redacted] y C[redacted] D[redacted]. La explotación de C.N.F., consistía en una rutina que comenzaba a las 7:00 hs. de la mañana, con la limpieza de la casa, a las 9:00 hs. tenía que preparar el desayuno para ella y para el niño, después tenía que lavar los platos y la ropa. A las 11:00 hs. cuando se despertaban F[redacted] y C[redacted], tenía que prepararles el almuerzo, lavar los platos, dar de comer al niño y seguir limpiando la casa, hasta las 16:00 hs. horario en el cual el Sr. C[redacted] la trasladaba a un puesto callejero de venta de celulares usados, cargadores y otros accesorios en la feria de Villa Celina donde atendía al público, hasta las 23:00 hs.. Regresaban y tenía que preparar la comida para F[redacted] C[redacted], C[redacted] D[redacted] y su hijo, quien demandaba su atención hasta las 4:00 o 5:00 hs. de la madrugada. Que debido a su estado de agotamiento, su rutina comenzó a iniciarse a las 9:00 hs. Cabe destacar, que la víctima tenía prohibido hablar con los vecinos, con los concurrentes a la feria y también tenía prohibida las comunicaciones telefónicas con su familia. No le permitían

#30162003#247843623#20191025103828874

salir de su vivienda y no tenía llaves del inmueble. Aparte de su rutina extenuante, C.N.F. refirió que recibía golpes en su rostro por parte de [redacted] y [redacted], como también, insultos, ofensas, humillaciones, amenazas de muerte a ella y sus familiares y le exhibían armas. Que hasta sufrió un intento de violación, en el mes de marzo de 2016, por parte de [redacted], que logró evitar y esconderse. Situaciones de violencia que comenzaron a incrementarse a punto tal que no le permitían comer, en otras ocasiones le preparaban comida… para asquearla o le introducían por la fuerza alimentos, provocándole sangrados en la nariz y boca. También, la amenazaban con cortarle sus brazos, lengua o con romperle la cabeza. En cuanto a su salario, la víctima refirió que en una sola oportunidad, [redacted] y [redacted] le enviaron a su familia $2.000, y agregó que si algún objeto se rompía o sucedía algún robo, debía asumir las pérdidas económicas como también, pagar por la ropa que utilizaba y así, aumentaba su deuda económica. Que cuando la menor C.N.F. les expresó a [redacted] y a [redacted] que quería volver con su familia, le contestaron que había venido a trabajar por un año, que no le abonaría el pasaje de regreso ni le devolverían su cédula de identidad, su partida de nacimiento original, ni la autorización legal de su madre y su padre. Finalmente, un día antes de su presentación en el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia en este país –ocurrido el 24 de junio de 2016-, cuando C.N.F. estaba en el puesto de venta de Villa Celina, le pidió dos pesos ($2) a [redacted] para utilizar los baños,

situación que aprovechó para escarparse del lugar y dirigirse a la casa de una joven que conoció en la feria quien la acompañó al día siguiente al consulado.

Esas secuencias fueron calificadas como constitutivas del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por mediar engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad y también por resultar la víctima menor de edad (artículos 145 bis, 145 ter, inciso 1º y, último párrafo, –texto según ley 26.842- del Código Penal), que tipifica: el que captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.

2. El magistrado del tribunal oral dio por probada la explotación laboral de la menor C.N.F., por la extensa jornada laboral cumplida con situaciones de violencia y malos tratos, que ella contara como vividas hasta que logró escapar.

Partió de que en Cámara Gesell, relató que: “al llegar al país tenía que limpiar yo, todas las cosas y lo limpie...y pasado un mes me trató mal la señora. Me empezaba a retar, no sirves para nada, tratándome mal, aguante todo eso, su hijo era bien travieso, agarraba el yogurt y me echaba en todo el cuerpo…. La señora estaba embarazada; yo a la tarde iba a vender junto al señor y después pasó cuatro meses y el señor me pegó, una vez primero me dio un lapo en la cara, que su hijita estaba en la terraza y tiraba los juguetes, quitale decía su mamá, y cuando le quito llora y me decía para que le haces llorar;

el señor se acercó y me pegó. Después me dio un lapo en la oreja... tenía venta de celulares su trabajo era desde las cuatro de la tarde hasta las once o doce de la noche pero siempre iba yo con la mujer pero ella estaba embarazada y yo iba y se quedaba durmiendo. No me pagaban nada. De nuevo me pegó el señor por su hijito que quería tirar la tele, yo estoy cocinando y no son capaz de mirarlo, C[redacted] ese bebé no le puede mirar, me dice; pero si estoy cocinando como voy a hacer las dos cosas, como su hijo es travieso no se puede fijar yo estoy cocinando, no le puedo hacer esa cosa. Entonces el señor vino y me dio un lapo, me empujó al piso y cuando me paré me retaba, aprende me dice; como no tienes familia te voy a hacer cualquier cosa, te puedo matar. Es la segunda vez que me pegaron así. La señora se mataba de risa, era para su alegría. El señor me agarraba y me pegaba y decía la señora te va a hacer desaparecer del planeta. La señora me dijo con los peruanos no te podes meter así, te va a matar, así que escuchaste, calladita boluda, campesina india..." (ver fs. 117/125).

Según el fallo ese testimonio de la menor, se reforzó con el informe elaborado por las licenciadas Griselda Hoffmann, Gloria Almada y Norma Mazzeo, del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (cfr. fs. 29, 31/34, 100/107 y 173/180) donde se asentó que :"...la adolescente relató que a partir de entonces, la Sra. F[redacted] C[redacted] y el Sr. C[redacted] le indicaron que su rutina de trabajo en el lugar (se) iniciaba a las 7:00 hs. de la mañana. Que debía empezar a limpiar la casa en ese

horario, a las 9:00 hs. tenía que continuar con la preparación del desayuno para ella y para el niño, seguidamente lavar los platos, la ropa, a las 11:00 hs. se despertaban la Sra. F[redacted] y su pareja y ella debía ocuparse del almuerzo, servirlos a ambos, luego levantar la mesa, lavar los platos, alimentar al niño, continuar limpiando la casa y a las 16:00 hs. el Sr. C[redacted] la llevaba hasta un puesto callejero de venta de celulares usados, cargadores y otros accesorios en la feria de Villa Celina, donde debía ocuparse de la atención al público y permanecía 'muriéndose de frío' hasta las 23:00 hs. Luego era trasladada nuevamente hasta el domicilio y una vez arribada, debía preparar la cena, preparar al niño, quien según refirió permanecía despierto y demandaba su atención hasta las 04:00 o 05:00 hs. de la madrugada. La Srta. F. refirió que estaba sonámbula en referencia a su estado de cansancio y agotamiento, y expresó que, como no lograba levantarse a las 07:00 hs. progresivamente su rutina empezó a iniciarse a las 09:00 hs.".

A lo expuesto, se le sumó el informe efectuado por la licenciada en psicología Isabel Gens del Cuerpo Médico Forense, que concluyó que la víctima "N. C. F. hizo alusión a los hechos que se investigan en autos mostrando consistencia y coherencia en el contenido, comparado con los antecedentes de autos enunciados…. El modo discursivo fue fluido y abierto. Pudo realizar una adecuación contextual de las situaciones narradas. Con respecto al análisis del contenido de la declaración de la adolescente es posible decir que su relato presenta estructuración

lógica, elaboración inestructurada y aporta detalles. Los episodios poseen adecuación contextual, descripción de interacciones, reproducción de conversaciones. Con relación a las peculiaridades del contenido presenta deta-lles superfluos, alusiones al estado mental subjetivo de la adolescente y de los involucrados. Respecto de la motivación presenta correcciones espontáneas, admite faltas de memoria. Respecto de las características de la ofensa, presenta detalles característicos. Muestra coherencia emocional con respecto a las situaciones narradas".

También se tuvo en cuenta que la psicóloga Griselda Hoffmman, que en el debate expuso que: "las dinámicas de violencia, maltrato y amenazas se habrían incrementado día a día, la víctima expresó que no podía sostener más la convivencia con las personas denunciadas puesto que ambos la agredían continuamente, que le ocasionaban tratos que la dañaban físicamente en ocasiones no le permitían comer, en otras la obligaban a comer comida que preparaban para asquearla (ejemplo comidas a las que le colocaban sal en exceso) y le introducían por la fuerza alimentos, provocándole sangrado en la nariz y la boca. La amenazaban refiriéndole que le iban a buscar a la familia y la iban a matar que la buscaría la policía y que si la encontraban la iban a matar. Agregó que en ocasiones el Sr. C[redacted] le apuntaba con sus armas en la cabeza".

El magistrado concluyó que lo informado por las profesionales refuerzan y corroboran lo expuesto por la víctima en el Consulado de Bolivia y en la Cámara Gesell (fs. 113/125).

Fue sobre la base de los dichos de la menor y los comentarios de las profesionales que se dio por probado que los procesados con el objeto de retenerla, le prohibían hablar con otras personas, era controlada por otras allegadas a la familia, le retuvieron sus documentos y la amenazaban indicándole que si decía algo la matarían a ella y a su familia.

El rol de uno de esos controladores fue atribuido al remisero E[redacted] O[redacted] A[redacted] S[redacted], que trabajaba para C[redacted] D[redacted], y que llevaba a la víctima a la plaza junto con el hijo de la familia, y luego de regreso al domicilio.

Se dio por probada la retención de los documentos en poder de los encausados con el hecho de que cuando G[redacted] C[redacted] D[redacted] se presentó ante la Comisaría de Villa Celina a denunciar la desaparición de C.N.F., aportó la autorización de viaje otorgada por los progenitores de la menor y declaró que la niña no llevaba dinero ni DNI encima (ver fs. 126/127).

Otro dato considerado de explotación fue la concurrencia de la joven al puesto de venta de celulares, en la intersección de [redacted] y [redacted] (conf. declaración de la niña, de C[redacted] D[redacted] y del testigo P[redacted] F. F[redacted] P[redacted]).

La "coacción" para lograr la sumisión y explotación ejercida se tuvo por probada, según el fallo, con sus dichos acerca de que le dijeran que: "Si te escapas o haces algo voy contra tu familia y a tu papá y mamá los voy a matar, parece que su sobrino metido contra

narcotraficantes y el un poco también porque me di cuenta que está metido por eso me amenaza a mí y mi familia y estoy asustada, a veces sueño que está matando a mi familia y amenazando a mis tías, capaz está en el contrabando, a veces tengo miedo y a veces estoy en la casa llorando, que una vez llamó a mi papá que te voy a matar a toda tu familia, a tu hija y yo estuve asustada y después de ahí que me amenazó no podía aguantar más".

De esas piezas se dedujo en la sentencia que la promesa que los coprocesados hicieran a la niña y a su familia distó sustancialmente de la realidad, pues en un clima de violencia física y moral, C.N.F. no sólo se encargaba de cuidar al hijo de los encausados hasta altas horas de la madrugada, sino que tenía que realizar los quehaceres del hogar, y trabajar en la feria de Villa Celina pudiendo descansar de dos a cuatro horas.

La evaluación de esas piezas confluyó en la explotación laboral de la menor por los enjuiciados.

3. Frente a la síntesis de los elementos de juicio obrantes en autos y la gravedad del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por mediar engaño, y abuso de una situación de vulnerabilidad y por resultar la víctima menor de edad, que se atribuye a los justiciables, he de anunciar que serán examinados con suma prudencia y siguiendo las reglas de la sana crítica.

Esta observación en la valoración de la prueba dificulta la concerniente al delito que se investigó.

En efecto, para analizar si la prueba recolectada es suficiente para dar por probado el delito previsto en el artículo 145 bis en relación con el 145 ter, primer inciso y último párrafo del Código Penal (según ley 26.842), atribuido a G F C y a G A C D, ha de controlarse si el fin de la explotación laboral para el cual se hizo venir a la menor de Bolivia se logró demostrar.

Es que si bien conforme se adelantó no están en duda las conductas desplegadas por los procesados en Bolivia para conseguir el permiso de los padres de la menor para trasladarla a trabajar en su domicilio en la localidad de Villa Celina, provincia de Buenos Aires, ni tampoco su concreción, difícil es probar acabadamente la explotación laboral agravada que se les imputó a los nombrados. No por su imposibilidad fáctica sino porque las pruebas acumuladas en la causa no resultan suficientes en tal sentido.

La finalidad de la explotación y, en el caso, su realización es la acción sobre la cual habrá de repararse pues las previas de ofrecimiento, traslado, acogimiento y aún las circunstancias agravantes deben girar en torno de aquella finalidad, que de no poder probarse, pierden el valor delictual.

Se asienta esta aclaración en tanto lo que se observa en el pronunciamiento impugnado es que se han acreditado las acciones, pero no esa explotación a la que necesariamente debían estar vinculadas para generar un accionar delictual.

Reparemos que lo que se atribuyó a los encausados fue una explotación laboral. Delito respecto del cual cabe repasar que su génesis devino del marco normativo internacional en el cual se fueron inspirando las sucesivas reformas en el derecho interno, como fueron las leyes nº 25.632, 26.364 y 26.842 que ratificaron y tipificaron el "***Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños***", denominado **"Protocolo de Palermo"**. Este en su artículo 3, inciso a) define la "**trata de personas**", como *"…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación…"*, que incluye *"…como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos…"*, finalmente en los años 2008 y 2012 nuestro país sancionó las referidas leyes 26.364 y 26.842 respectivamente de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" (B.O. 30/4/2008 y B.O. 27/12/2012).

Por otra parte, en doctrina Diego S. Luciani (en "Trata de Personas y Otros Delitos Relacionados", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, págs. 203 yss.) señaló que: "Si

bien el trabajo, en sí, lleva inherente el esfuerzo humano, tanto físico como intelectual, y el servicio implica una cierta sujeción a un tercero que emplea a otro para la realización de cierta labor, debe tenerse especialmente en cuenta que nadie puede verse obligado o compelido a realizarlos. Así será considerada forzada la actividad cuando exista algún tipo de coacción y, por ende, la voluntad se encuentre viciada y el acto se lleve adelante sin discernimiento, intención y libertad. Es esto precisamente lo que se desprende de las normas internacionales en la materia" (cfr. Convenio sobre Trabajo Forzoso del año 1930 y Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957 y las pautas enunciadas por la Organización Internacional del Trabajo).

Y he aquí que esa finalidad de "explotación laboral" es lo que si bien no puede descartarse de plano, no está sustentada en suficientes piezas incriminantes.

Es decir, que si bien la captación, traslado, y el acogimiento de la menor no se discute, no ocurre lo mismo con la explotación.

Los motivos por los cuales los coprocesados trajeron a la menor desde su país natal para colaborar con ellos existían, pues F[redacted] C[redacted] estaba embarazada, no se sentía bien, tenían un puesto de venta en una plaza que debían atender y en esas condiciones podían necesitar de una joven para que la ayudara en la asistencia del niño.

Por supuesto que no se descarta que el motivo de origen pudo haberse trastocado ya en el lugar de convivencia llegando incluso a una explotación, pero lo

cierto es que al respecto la única prueba incriminante directa proviene de la damnificada, quien ni siquiera se quedó en el país para reforzar las imputaciones efectuadas en los inicios de la investigación.

Para peor esa dificultad se agrava porque su relato se vuelve en parte, incoherente a punto de transmitir circunstancias que pueden haber estado apoyados en la realidad, pero otras, no tanto.

Me refiero, en especial, a la secuencia de la labor diaria, que de atenernos a los horarios indicados arrojaría la conclusión de que no descansaba más de dos a cuatro horas diarios o, ni siquiera éstas, lo que introduce algunas dudas de su veracidad. Repárese que de seguir su versión horaria resulta que su rutina se iniciaba a las 7.00 horas con la limpieza de la casa, seguía a las 9.00 horas con la preparación del desayuno para ella y el niño, tenía que lavar los platos y la ropa; y a las 11.00 horas cuando se despertaban los coprocesados tenía que preparar el almuerzo, lavar los platos, dar de comer al niño y seguir limpiando la casa, hasta la tarde (16.00 horas) cuando C[redacted] D[redacted] la trasladaba al puesto de venta de celulares en una plaza hasta las 23 horas que retornaban al hogar. Una vez de regreso debía preparar la cena, y cuidar al niño, quien –según sus dichos- permanecía despierto hasta las 4 o 5 horas de la mañana.

Cabe aclarar que el hecho de que la forzaran a ingerir determinados alimentos hasta hacerla sangrar por la boca y la nariz así como que le apuntaban con armas a la cabeza no quedó probado pues no hubo testimonios al

respecto, y ni siquiera se allanó el domicilio de los encausados lo que hubiera permitido conocer al menos la existencia de algún arma, o comprobar las condiciones en las cuales la menor vivía.

Como se ve los elementos de juicio son controvertidos, y ni siquiera se pudo lograr la comparencia de la "Srta A[redacted] M[redacted]" que habría asistido a C.N.F. cuando se escapara (fs. 35) y que hubiera podido aportar elementos de juicio precisos.

Si bien se cuenta con los dichos de las profesionales, es de remarcar que tuvieron como única fuente los dichos de la víctima con lo cual sigue siendo ésta la prueba de cargo incriminante.

No dejo de apreciar que la joven, alejada de su hogar y desprotegida, bien pudo haber sido objeto de trabajos que excedían su capacidad, sin recibir siquiera los beneficios prometidos, pero de ahí a entender esa situación como propia de una explotación laboral, queda un margen de duda que no se logra despejar.

Tampoco se dejó de tener en cuenta que en este tipo de procesos, la prueba siempre resulta escasa, pero para preservar la estricta observancia de las reglas de la sana crítica en un juicio criminal resulta necesario contar con algún elemento de juicio objetivo, que en el caso no se encuentra (art. 398, párrafo segundo del C.P.P.N.).

Podría tal vez haber asumido ese carácter la versión del remisero, E[redacted] O[redacted] A[redacted] S[redacted], quien dijo ser amigo de G[redacted] O[redacted] D[redacted] desde hacía siete años, sin embargo no se logra pues dio cuenta que brindaba

a los encausados un servicio de remis que a veces cumplía con la menor llevándola a "Jumbo" o a la plaza de Lugano con el nene y allí la dejaba y cuando querían regresar ésta llamaba a la remisería y la pasaba a buscar. Dichos de los cuales se extrae que la menor tenía posibilidades para pedir auxilio pues se quedaba sola y sin embargo no lo hizo, quizás por temor, pero sigue quedando la duda.

Ni siquiera los padres de la menor C.N.F., R[redacted] N[redacted] C[redacted] y M[redacted] F[redacted] A[redacted], esclarecieron la cuestión con pruebas de cargo, pues de sus declaraciones informativas ante la Policía de Bolivia agregadas a la causa, e incorporados por lectura al debate, nada surge sobre el trato que recibía su hija de la pareja mientras vivía con ellos en la casa de Villa Celina (cfr. fs. 297 y 298 y 468) y en el debate, el progenitor vía Skype, sólo dijo que su hija viajó a la Argentina para ayudar a G[redacted] F[redacted] C[redacted] con su hijo y para conocer el país.

Versión que en la sentencia se tomó con "especial cuidado" porque eran contradictorios, pese a que sólo aludió a la presencia de los enjuiciados en Bolivia para buscar y traer a la menor.

Tampoco arrojaron luz sobre los hechos los testigos propuestos por las defensas, entre ellos P[redacted] F[redacted] F[redacted] P[redacted], quien se limitó a comentar que conocía a G[redacted] C[redacted] porque alquilaba la casa de su hermano a quien veía en reuniones familiares, donde también se encontraba la menor C.N.F. al igual que en la feria donde él tiene un puesto de venta de lencería y Ca[redacted]

otro de venta de accesorios de celulares (fs. 492 vta.) y que sabía que vivía con ellos.

A resultas de lo que se viene exponiendo quedan la fuerte incriminación de la menor y la fuerte resistencia de los encausados, quienes lejos de admitir los hechos dijeron que la menor viajó a la Argentina para ayudarlos en el cuidado de su hijo.

La equivocidad que fluye de las piezas evaluadas se vio acentuada por la ausencia de la menor C.N.F. en el debate, lo que imposibilitó la confrontación directa de sus dichos o una mejor apreciación de ellos, y aún de su fidelidad.

Recuérdese que ésta sólo depuso en el Consulado de Bolivia ante las profesionales de la oficina de rescate y acompañamiento para víctimas de trata, y posteriormente mediante Cámara Gesell, y pese a que las defensas se opusieron, se incorporaron por lectura al debate. Ausencia que no pudo ser superada ni siquiera por el exhorto diplomático tardío remitido por el tribunal oral ni por el empeño demostrado por las defensas para poder ubicarla.

Medidas que resultaron infructuosas a punto que en una comunicación establecida con su padre, éste expresó que su hija estaba en Brasil o Chile, que se comunicaba cada tanto y que no tenía su teléfono, y en otra declaración vía Skype tampoco hizo algún aporte esclarecedor.

Sin la presencia de la menor en el debate se terminó de dificultar el conocimiento de la verdad real y la tarea de las defensas en ese sentido toda vez que vieron

cercenada la posibilidad de controlar la prueba de cargo más fuerte, contenida en la versión de la joven.

Cabe adunar que no existe otro cauce independiente que permita arribar, mediante la supresión mental hipotética de la declaración de la menor, a un resultado certero para condenar.

Es de evocar en ese sentido que las tareas de inteligencia llevadas a cabo por la policía en los domicilios donde habitaban los acusados, limitadas a las detenciones de los enjuiciados, no proporcionaron datos de interés como podrían haber sido los derivados de los allanamientos, que hubieran permitido al menos conocer sus condiciones de vida así como las de la joven, aspecto en el cual también hubieran sido de interés las deposiciones de los vecinos, ausentes en el caso.

Nótese que los representantes del Ministerio Público Fiscal actuantes ni siquiera atinaron a proponer alguna diligencia para hacer comparecer a testigos de cargo, o alguna otra que podría resultar útil para esclarecer el suceso.

Esas falencias, impiden a mi juicio, a esta altura, alcanzar la certeza requerida para aplicar condenas de 10 años de prisión, sin que se viole el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal (art. 18 de la C.N.).

Se recuerda, una vez más, que para una conclusión incriminante se requiere, de acuerdo con las reglas de la sana crítica establecidas en el art. 398, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación,

demostrar la plena responsabilidad del enjuiciado en los hechos imputados con suficientes pruebas contestes e indubitables, que ponderadas en conjunto conduzcan de manera inequívoca a dicha conclusión, juicio no alcanzado en autos.

Sobre la certeza dice Pedro Ellero, en su obra "Juicios Criminales" (segunda edición española, Madrid, 1900, pág. 40 y ss.) que los tres estados de ánimo con relación a una creencia positiva o negativa son la certeza, la probabilidad y la duda, únicos y verdaderos grados persuasivos del hombre. De ellos los términos imprecisos e invariables sólo son el primero y el tercero, esto es, la certeza y la duda, porque en el primero no hay un solo elemento de duda y en el tercero ni uno de certeza; en cambio el segundo es un término indeciso y variable, pudiendo haber en él una probabilidad indefinidamente mayor o menor no sujeta a medida.

Por su parte, Mittermaier, en su "Tratado de la Prueba en Materia Criminal" (Madrid, hijos de Reus, Editores, 1901, pág. 61 y ss.) expresa que "para que haya certeza se exige el cumplimiento de ciertas condiciones esenciales: 1°) un conjunto de motivos, acreditados por la razón y la experiencia, para poder servir de base a la convicción; 2°) es preciso que la preceda un esfuerzo grave e imparcial, profundizado y apartando los medios que tiendan a hacer admitir la solución contraria. El que desea adquirir certeza no cierra jamás la puerta a la duda, antes bien se detiene en todos los indicios que pudieran conducir a ella y sólo cuando la ha hecho desaparecer completamente

es cuando su decisión se hace irrevocable y se asienta sobre la base indestructible de los motivos de la convicción afirmativa. 3°) no puede existir certeza hasta haber sido alejados todos los motivos resultantes de los autos, que tienden a presentar la inculpación como descansando acaso sobre una imposibilidad o lleguen a dar un resultado positivamente contrario al que los demás motivos suministran...". Sigue diciendo este autor que "conviene distinguir muy bien la probabilidad de la certeza. Hay probabilidad cuando la razón, apoyándose en motivos graves, tiene por verdadero un hecho, pero sólo en el caso de que los motivos poderosos en contrario no hayan completamente desaparecido. Resulta la probabilidad o de que la convicción no descansa sino en ciertos datos, o que a pesar de su reunión no son todavía bastante poderosos para producir la certeza. En ninguno de estos casos puede tomarse la probabilidad por base de una condena, porque siempre queda lugar a la duda y la conciencia no puede quedar satisfecha de tal modo que parezca haberse desvanecido la posibilidad de lo contrario".

Y he aquí que deteniéndonos en la duda, en ella quedamos sin posibilidad de superarla, según una correcta administración de justicia.

Distinguida doctrina así lo afirma: "cuando un individuo aparece como autor de un hecho al que la ley señala consecuencias aflictivas, y siempre que se trata de hacerle aplicación de ellas, la condena que ha de recaer descansa en la certeza...","la importancia y trascendencia del ministerio penal no permite ni aún la sospecha de que

los juicios en lo criminal descansen sobre meras probabilidades, porque la conciencia social se sublevaría indignada si sus resoluciones no se constituyesen sobre la base inconmovible de la certeza" (confr. Karl Joseph Anton Mittermaier, "Tratado de la prueba en materia criminal", FD Editora, Bs. As., 1999, págs. 71 y 506/507, respectivamente); "... la prueba no es en el fondo otra cosa que querer la demostración de la verdad y el convencimiento del juez, quien para sentenciar necesita adquirir plena certeza.... La convicción toma el nombre de certeza desde el momento en que rechaza victoriosamente todos los motivos contrarios, o desde que éstos no pueden destruir el conjunto imponente de los motivos afirmativos.... Mientras quede una sombra de duda, no puede haber certeza posible para el juez concienzudo....(no) puede tomarse la probabilidad por base de una condena, porque siempre queda lugar a la duda, y la conciencia no puede quedar satisfecha de tal modo que parezca haberse desvanecido la posibilidad de lo contrario" (confr., el mismo autor, la misma obra, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2006, pág. 79/86; C.F.C.P., Sala I, "Zúñiga, José Domingo s/recurso de casación", causa n° 7523, reg. N° 10.191, del 13 de marzo de 2007; "Marullo, Rodolfo, Gustavo s/rec. de casación", causa n° 6958, Reg. n° 10.250, del 27 de marzo de 2007; y, Sala III, mi voto, in re: "Echeverría, José Oscar s/recurso de casación", causa n° 10.988, Reg. N° 1437/09, rta. el 13 de octubre de 2009).

En relación con el principio mencionado, en la causa n° 3506 "González Mélida, Leonardo y otro s/rec. de

casación" (Reg. N° 317/02 del 11/6/2002), de esta Sala III, se sostuvo que "…en general...se ha entendido que el principio ´in dubio pro reo´ tiene jerarquía constitucional...,por ser la concreción legislativa de la presunción de inocencia que el artículo 18 de la Constitución Nacional reconoce a todo ciudadano que no ha sido condenado por sentencia firme. Y ello así, porque el estado jurídico de inocencia sólo puede ser destruido mediante la certeza apodíctica de la autoría y la culpabilidad (estar seguro que el imputado es el responsable del hecho incriminado), no siendo posible desvirtuar dicho estado cuando existen dudas sobre tales extremos. El que duda no puede juzgar, no puede afirmar ni negar; por ello se dice ´sed nec suspicionibus debere aliquem damnari, satius enimsse impunitum relinquit facimus nocentis quam inocentem damnare´ (nadie debe ser condenado por sospechoso, es mejor dejar impune un delito que condenar al inocente)".

Semejante conclusión tomada por el órgano sentenciante, supone, siguiendo los términos del Superior, "…vaciar de contenido al principio 'in dubio pro reo' en función del cual cabe dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el proceso, puede emitirse un juicio de certeza...Lo contrario deja un resquicio a la duda, tratándose, cuanto mucho, de una hipótesis de probabilidad o verosimilitud, grados de conocimiento que no logran destruir el estado de inocencia del acusado con base en aquél principio" (art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación) (cfr. Fallos V. 1283. XL. Recurso de Hecho Vega

Giménez, Claudio Esteban s/ tenencia simple de estupefacientes. Causa N° 660C.", del 27 de diciembre de 2006.").

Lo expuesto se aviene, a lo recientemente señalado por ese Alto Tribunal en cuanto a que "...en el derecho procesal penal el 'in dubio pro reo' y la prohibición de 'non liquet' (arg. Fallo: 278:188) imponen un tratamiento diferente de tales alternativas, a partir del cual, en definitiva, el juez tiene impuesto inclinarse por la alternativa fáctica que resulta más favorable al imputado." (in re Fallos "CSJ. 1497/2013 (49-C)/CS1 Recurso de Hecho "Carrera, Fernando Ariel s/causa nº 8398).

Pero además, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lleva dicho que: "El hecho de que el Estado haya realizado todos los esfuerzos posibles para hallar al testigo y para satisfacer la pretensión de la defensa de interrogarlo, carece de toda relevancia, pues lo que se encuentra en discusión es otra cosa: si la base probatoria obtenida sin control de la defensa es legítima como tal. De allí que la invocación de la 'imposibilidad' de hacer comparecer al testigo no baste para subsanar la lesión al debido proceso que significa que, finalmente, la parte no haya tenido siquiera la posibilidad de controlar dicha prueba. Desde este punto de vista, lo decisivo no es la legitimidad del procedimiento de 'incorporación por lectura', el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se respete el derecho de defensa del acusado… (y) …el derecho

consagrado por los arts. 8.2.f, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3.e, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (C.S.J.N., in re: "Benítez, Aníbal Leonel s/lesiones graves", B. 1147. XL, causa n° 1524, rta. el 12 de diciembre de 2006).

Frente a ese cuadro incierto, la condena no resulta sostenida en una evaluación probatoria ajustada a las reglas de la sana crítica (art. 398 del C.P.P.) y por ende no alcanza para tener un acabado y certero conocimiento de una explotación laboral agravada por mediar engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad, y por resultar la víctima menor de edad, llevada a cabo por los procesados en perjuicio de la menor, sino que la duda persiste.

En su consecuencia se impone la aplicación del principio "in dubio pro reo" previsto en el artículo 3 del Código Procesal Penal en sintonía con el artículo 18 de la Constitución Nacional, aplicable al caso en resguardo del debido proceso que conduce a la absolución de los encausados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado.

La solución adoptada, entonces, me releva de responder los agravios tardíos introducidos en el término de oficina por la Defensa Pública Oficial de [redacted] referentes a la arbitrariedad en el monto de la pena y a la eximición en el pago de las costas.

En tales condiciones, y teniendo en cuenta que lo resuelto se encuentra, además, en sintonía con las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en

el precedente citado (in re: "Benítez, Aníbal Leonel s/lesiones graves"), corresponde: **Hacer Lugar**, en forma parcial, a los recursos de casación interpuestos por las defensas, sin costas; **Casar** la sentencia cuestionada y, en consecuencia, **absolver** a **G[redacted] A[redacted] C[redacted] D[redacted] y a G[redacted] F[redacted] C[redacted]** en los términos del art. 3° del C.P.P.N. del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por mediar engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad y por resultar la víctima menor de edad por el que fueran acusados, **ordenando la inmediata libertad de los nombrados en la presente causa** (arts. 3°, 123, 398, segundo párrafo, 404, inc. 2°, 456, 471, 530 y 532, *a contrario sensu*, del C.P.P.N.).

Tal es mi voto.

El señor juez doctor **Carlos A. Mahiques** dijo:

I. Comparto, en lo sustancial, las consideraciones expuestas por la doctora Catucci al rechazar los planteos de nulidad reeditados en esta instancia, a las cuales me remito.

II. A fin de tratar los cuestionamientos dirigidos a la valoración de la prueba realizada por el *a quo,* es de aplicación la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Casal" (Fallos 328:3329), que impone al juzgador el esfuerzo por revisar todo lo que sea susceptible de revisar, o sea, de agotar la revisión de lo revisable (conf. considerando 23 del voto de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti; considerando 11 del voto del juez Fayt y considerando 12 del voto de la jueza

Argibay).

En efecto, los jueces del tribunal de grado son soberanos en la apreciación de los elementos de prueba y no cabe aquí sustituir esa tarea, sino únicamente controlar la razonabilidad de la motivación que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta. Pero, en el caso, median errores significativos en la interpretación realizada en la sentencia del material probatorio reunido durante la audiencia de debate.

III. Coincido con la distinguida colega preopinante en que una valoración crítica de la prueba adquirida en el proceso impide sostener, con el necesario grado de certeza, que G[redacted] F[redacted] C[redacted] y G[redacted] A[redacted] C[redacted] D[redacted] cometieron el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado por el cual fueron condenados.

Los magistrados basaron la condena en las declaraciones de C.N.F., a saber, aquella que surge de los informes elaborado por las licenciadas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata que entrevistaron a la nombrada (fs. 100/107 y 173/179 vta.), y la realizada en Cámara Gesell (fs. 117/125).

Sucintamente, de las mismas surge: 1) que C.N.F. vivía con sus padres en Bolivia, país del que es oriunda, cuando F[redacted] C[redacted] y C[redacted] D[redacted] la contactaron para ofrecerle trabajo como niñera en Argentina, que la jornada laboral se extendería de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., percibiría un sueldo de $BS 5.000

(equivalente a $12.000) e incluía el traslado a nuestro país y la vivienda; 2) que los imputados se hicieron cargo del costo de la autorización legal para que la menor saliera del país; 3) que la hacían dormir en una habitación sucia, en un colchón en el piso, en un inicio, sin sábanas; 4) que era sometida a una extensa jornada laboral, en la que debía cuidar al hijo de los imputados, limpiar la casa, cocinar y trabajar en un puesto callejero dedicado a la venta de teléfonos celulares usados y accesorios -ubicado en la feria de "Villa Celina"-, no dejándole tiempo para descansar; 5) que no percibía un salario por su trabajo y, por el contrario, le exigían una deuda económica por los objetos que rompía o desaparecían de la casa o feria; 6) que tenía prohibido hablar con otras personas (familia, vecinos y concurrentes a la feria); 7) que sólo salía de la casa para trabajar en la feria, hacer las compras en el supermercado o llevar al hijo de los imputados a la plaza; 8) que no tenía llave de la vivienda y cuando salía lo hacía "controladita"; 9) Que los imputados retenían su documento de identidad; 10) Que sufrió, además, golpes en su rostro -relató cuatro episodios en los que C[redacted] D[redacted] la golpeó en la cara-, insultos, humillaciones, amenazas de muerte con arma de fuego y un intento de abuso sexual por parte del imputado.

Por su parte, los imputados negaron los hechos y sostuvieron que la oferta laboral consistió en abonarle $3.000 por mes a cambio de su colaboración en las tareas del hogar y en el cuidado de su hijo, lo cual fue acordado con los padres. Reconocieron que algunas veces la menor

atendía el local de celulares que tenían, pero destacaron que le pagaban todos los meses y que la jornada laboral no era tan extensa como la denunciada. Refirieron que el trato con la menor era amable, que tenía una habitación privada solo para ella, que le dieron ropa y comida e, incluso, quisieron inscribirla en el colegio, pero que no consiguieron vacante.

Indicaron que C.N.F. tenía llaves de la casa, podía salir y entrar libremente, y se comunicaba con su padre a través de su teléfono celular (confr. declaraciones indagatorias de fs. 201/203 y 204/206 vta.).

Si bien no es óbice que la prueba de cargo puede sustentarse en la sola declaración de la víctima, cuando ello ocurre "es exigible una especial cautela que debe tener como referencias o elementos de contraste la falta de credibilidad subjetiva del testigo, la verosimilitud de su declaración y la coherencia o persistencia de la misma, pero bien entendido que no constituyen condiciones para la validez de la declaración, sino meros instrumentos funcionales o guías de referencia para su valoración y confronte (confr. en la jurisprudencia comparada Tribunal Supremo de España, Sentencia Nro. 1689/2003, rta. el 18 de diciembre de 2003, ponente D. Juan Saavedra Ruiz; Sala III de la CNCP, causa nº CCC 6705/2012/TO1/CNC1, "Jiménez, Roberto Claudio y otro s/ robo en tentativa", reg. nº 246/2015, rta. el 15 de julio de 2015).

En el presente caso, surge del confronte crítico de las declaraciones de C.N.F. que esta incurrió en serias

contradicciones, que restan verosimilitud a la totalidad de sus dichos. Así, en un comienzo, dijo que su jornada laboral iniciaba a las 7:00 a.m. y que se extendía hasta las 4:00 o 5:00 a.m. (fs. 100/107), para después, a pesar de enfatizar en que no tenía mucho tiempo para descansar, hizo alusión de que no tenía horario para dormir ni despertar y que, a veces, F[redacted] C[redacted] la despertaba a las 11:00 a.m. (fs. 117/125).

La sedicente victima les dijo a las licenciadas Griselda Hoffmann y Gloria N. Almada que estaba incomunicada, que F[redacted] C[redacted] y C[redacted] D[redacted] le prohibían hablar con los vecinos, con personas presentes en la feria y mantener comunicaciones telefónicas con su familia. Sin embargo, en Cámara Gesell, indicó que, antes de viajar a nuestro país, el padre le dio un teléfono celular para comunicarse con ellos y que cuando su hermano tuvo un accidente de tránsito, le mandaba mensajes de texto pidiéndole dinero. Además, preguntada sobre ese teléfono, primero dijo que se lo robaron los "chorros" y, posteriormente, refirió que no podía usarlo porque F[redacted] C[redacted] le quitó el chip al mes de convivir con ellos, cuando C[redacted] D[redacted] se enojó con ella y la golpeó. Esta circunstancia se contrapone con sus dichos iniciales en cuanto a que el primer golpe que recibió por parte del nombrado fue a los cuatro meses de llegar al país y respecto de lo anterior, R[redacted] N[redacted] C[redacted] y M[redacted] F[redacted] A[redacted], padres de la menor, manifestaron que se comunicaban frecuentemente con su hija (fs. 300/301).

A las incertezas referidas, se sumó lo afirmado

#30162003#247843623#20191025103828874

respecto a que estaba siempre "controladita", extremo que se contradice con su expresión que salía sola de la casa a hacer las compras y a la plaza y que trabajaba todas las tardes en un lugar abierto al público (el puesto de la feria "Villa Celina"), al que concurrían sus primos -quienes le podían brindar contención-, y donde conoció a una persona que la acompañó a hacer la denuncia a la embajada.

En cuanto a la falta de remuneración por sus labores, se oponen los dichos de F[redacted] C[redacted] y C[redacted] D[redacted], que refirieron haberle pagado todos los meses alrededor de $3.000; y también los de sus padres, quienes afirmaron que su C.N.F. les contó que recibía su sueldo mensualmente y que en una oportunidad colaboró con dinero por un problema familiar (fs. 300/301). Esta última situación fue recordada tanto por los imputados como por C.N.F.

Tampoco debe cargarse a los acusados, la deficiente investigación que omitió realizar un allanamiento o una inspección ocular del domicilio de F[redacted] C[redacted] y C[redacted] D[redacted] para verificar las condiciones en las que vivía C.N.F., o, eventualmente, secuestrar el documento de identidad de la menor o el arma a la que hizo mención. Incluso se podría haber constatado si alguno de los imputados se encontraba registrado como legítimo tenedor de arma de fuego.

Tampoco se contó durante el debate con declaraciones de testigos que podrían haber arrojado certeza sobre los hechos, como el caso de los primos de

C.N.F. que la visitaban en la feria de “Villa Celina”; o “A[redacted] M[redacted]”, quien la habría acompañado a hacer la denuncia a la embajada, y demás personas de la feria o los vecinos de donde habitaba.

IV. En esas condiciones, si bien se comprobó que los imputados trasladaron desde Bolivia a nuestro país a C.N.F. y la acogieron en su domicilio para que colaborara en el cuidado de su hijo menor, asignándole tareas domésticas y en el puesto de venta de teléfonos celulares, no se ha demostrado que el accionar de los imputados haya reunido los elementos exigidos por la norma para la configuración del delito endilgado.

No se demostró que la libertad ambulatoria de la presunta víctima haya sido limitada y/o restringida y que, a su vez, fuera reducida a la servidumbre o a un estado de esclavitud, como tampoco que haya realizado trabajos forzosos. Aun más, que su ámbito de autodeterminación se haya visto reducido de forma tal que no contara con la posibilidad real de tomar sus propias decisiones y la elección de un plan de vida. En este sentido, “el interés social que está por detrás de la sanción de cualquier norma del delito de trata de personas tiene que ver con el concepto de libertad, que no se restringe a la libertad ambulatoria sino que está asociado a la posibilidad de que una persona pueda auto determinarse o elegir un plan de vida en una sociedad dada….debe tenerse presente que la reforma introducida por la ley 26.842 reconoce que el consentimiento de la víctima no tendrá efecto. Por ello es posible concluir también que esta reforma incluye como bien

jurídico, además de la libertad, la dignidad humana. Es decir, nadie brinda su consentimiento para ser explotado. También se ha sostenido que la trata de personas vulnera la dignidad de la persona humana y el principio de igualdad" (La trata de personas con fines de explotación laboral Estrategias para la detección e investigación del delito. Edición: Dirección de Relaciones Institucionales-Ministerio Público Fiscal de la Nación Diciembre 2017).

El delito de trata de personas se encuentra contemplado en el artículo 145bis del Código Penal y es una figura compleja que afecta distintos bienes jurídicos, tales como la integridad física, la integridad sexual y la dignidad, que se estructura sobre el respeto a la libertad individual. Exige la comisión de alguna de las acciones expresamente previstas (ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger a la víctima) y, además, que hayan sido ejecutadas con "fines de explotación". Este elemento normativo del tipo penal no se circunscribe a la verificación de la explotación económica, sino también requiere que esta se vea reflejada en un estado de esclavitud, reducción a la servidumbre o en la realización de trabajos forzados por parte de la víctima. En esa dirección se motivará el autor quien buscará enriquecerse a costa de la víctima. Ese interés se traducirá en obtener la mayor cantidad de producción posible, sin otorgar contraprestación alguna a la víctima (art. 2º, incs. "a" y "b", de la ley 26.364, conforme ley 26.842).

Por ello, será tarea del juzgador realizar un celoso análisis de las circunstancias, para diferenciar

aquellos casos límite en los que no se distinga fácilmente si se está frente a una situación laboral irregular o si existe, efectivamente, una situación ilícita como la que contempla la figura bajo análisis.

Así pues, todas las consideraciones desarrolladas en el apartado anterior, me llevan a coincidir con la doctora Catucci en que los indicios aportados por el relato de 'C.N.F.' (reproducido también por las licenciadas que la entrevistaron en el marco de esta causa), aunque fueron importantes al momento de llevar a cabo la investigación, no son suficientes para fundar una sentencia condenatoria. Máxime cuando existe una duda insuperable en punto a la jornada laboral que la menor desarrollaba, si percibía o no un sueldo y, principalmente, sobre si, efectivamente, se encontraba privada o restringida ilegalmente de su libertad.

En este punto corresponde destacar que la presunción de inocencia, constitucionalmente garantizada, impone a la acusación la carga de la prueba por encima de cualquier duda razonable. El control casacional del cumplimiento del referido principio constitucional permite la constatación de la concurrencia de una suficiente prueba de cargo, legítimamente obtenida, lícitamente practicada y racionalmente valorada, que fundamente cualquier sentencia condenatoria. Pero la Constitución no incluye un principio de presunción de inocencia invertida, que autorice al tribunal casacional a suplantar la falta de convicción condenatoria del tribunal de instancia que ha presenciado personalmente la prueba, revisando la credibilidad de

declaraciones que no ha contemplado e introduciendo certeza condenatoria donde el Tribunal sentenciador no la ha apreciado (conf. mi voto en la causa nº 51.126, caratulada "Esturri, Cristian Hugo s/recurso de casación", del registro de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y, en igual sentido, la sentencia nº 258/2003 del Tribunal Supremo de España, rta. el 25/02/03, ponente Don Cándido Conde-Pumpido Tourón).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, ha establecido que la tacha de arbitrariedad es particularmente restringida cuando se trata de la aplicación de las normas que consagran el principio *in dubio pro reo*, toda vez que el estado de incertidumbre al que se refiere la ley se desarrolla en el fuero interno de los magistrados como consecuencia de la apreciación de los elementos del proceso en su conjunto, debiendo verificarse para aplicar aquella desaciertos de gravedad extrema que impongan su admisibilidad (Fallos 307:1456).

En definitiva, y por fuera del repudio que pudo ser la relación laboral entre los imputados y la menor y el trato recibido, que podría, por el caso, haber dado lugar a la imputación de otros delitos del catálogo represivo, no son elementos suficientes para sostener la existencia del delito de trata de personas imputado.

V. Por los motivos expuestos, adhiero a la solución propuesta por la distinguida colega preopinante.

Tal es mi voto.

El señor juez doctor **Eduardo Rafael Riggi** dijo:

En las particulares circunstancias del caso, habremos de acompañar la solución propuesta por la distinguida colega que lidera el acuerdo –que ya cuenta con la adhesión del doctor Mahiques-, por cuanto coincidimos en que el cuadro probatorio reunido y valorado en la sentencia en crisis impone en el caso de autos la aplicación del principio *in dubio pro reo* establecido en el artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación en favor de los imputados.

Cabe tener presente que la potestad -y el deber- que tienen los magistrados del Poder Judicial para valorar el cúmulo de probanzas arrimadas al sumario de conformidad con las reglas de la sana crítica racional, debe ser ejercida con meditación y prudencia, de manera tal que entre todas ellas conformen un conjunto armónico y conducente para establecer la verdad material de los hechos sometidos a proceso (ver nuestros votos en las causas Ñ 3574 *"Giampieri, Héctor y otro s/ rec. de casación"*, Reg. Ñ 378/02 del 12/7/2002 y Ñ 4517 *"DÁquila, Natalio s/ rec. de casación"*, Reg. Ñ 750/03 del 9/12/2003).

Estimamos, de esa manera, que si bien se cuenta en autos con un cúmulo de indicios -detallados en el voto de la doctora Catucci- que nos hacen presumir la existencia del hecho denunciado y juzgado, lo cierto es que los mismos no permiten arribar al grado de certeza necesario para arribar a un pronunciamiento condenatorio.

Llevamos dicho en nuestro voto en la causa Ñ 3506 *"González Mélida, Leonardo y otro s/ recurso de casación"* (Reg. Ñ317/02 del 11/6/2002) que *"el estado jurídico de*

inocencia sólo puede ser destruido mediante la certeza apodíctica de la autoría y la culpabilidad (estar seguro que el imputado es el responsable del hecho incriminado), no siendo posible desvirtuar dicho estado cuando existen dudas sobre tales extremos. El que duda no puede juzgar, no puede afirmar ni negar; por ello se dice 'sed nec suspicionibus debere aliquem damnari, satius enimsse impunitum relinquit facimus nocentis quam inocentem damnare' (nadie debe ser condenado por sospechoso, es mejor dejar impune un delito que condenar al inocente)".

De esta manera, consideramos que la prueba efectivamente recolectada en autos no ha logrado conducir hacia la precisión, convicción, seguridad y certeza requerida para un pronunciamiento condenatorio, circunstancia que nos impide homologar la decisión adoptada por el *a quo*.

En tales condiciones, adherimos a la propuesta de los colegas preopinantes y nos expedimos en idéntico sentido.

Tal es nuestro voto.

Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, **RESUELVE**: **Hacer Lugar**, en forma parcial, a los recursos de casación interpuestos por las defensas, sin costas; **Casar** la sentencia cuestionada y, en consecuencia, **absolver** a **G[redacted] A[redacted] C[redacted] D[redacted] y a G[redacted] F[redacted] C[redacted]** en los términos del art. 3° del C.P.P.N. del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por mediar engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad y

por resultar la víctima menor de edad por el que fueran acusados, **ordenando la inmediata libertad de los nombrados en la presente causa** (arts. 3°, 123, 398, segundo párrafo, 404, inc. 2°, 456, 471, 530 y 532, *a contrario sensu*, del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, hágase saber al Centro de Información Judicial –CIJ– de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada nº 5/2019) y remítase al Tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fecha de firma: 25/10/2019
Firmado por: LILIANA E. CATUCCI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: EDUARDO RAFAEL RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: DANIELA DORA ROCHA , PROSECRETARIA DE CAMARA

#30162003#247843623#20191025103828874